

4. Propuesta de reforma

Entidad Federativa AE

A lo largo del análisis de los expedientes hemos encontrado errores durante el proceso que son, por lo general, constantes y no solo en juzgados en lo específico, sino en todos y cada uno de los ellos.

Estos errores por lo general son en perjuicio de la víctima ya que con dichas actuaciones de las autoridades se podría pensar que la ley está a favor del delincuente, pues en la mayoría de los casos quien cuenta con apoyo ya sea desde el Ministerio Público hasta el Juez es desafortunadamente el probable responsable.

Siguiendo el análisis que nos corresponde en el cual nos enfocamos en el respeto de los derechos que le asiste a las víctimas, señalaremos los siguientes elementos los cuales consideramos son de gran importancia, ya que por lo general, la víctima o sus familiares no son apoyados y por lo mismo muchas de las ocasiones no le dan continuidad al proceso.

Por ello proponemos las siguientes alternativas para que el proceso penal en el AE cuente con la credibilidad y apoyo de la sociedad, de esta manera se tendrá una mayor garantía de que la víctima será restituida en el daño que le fue ocasionado.

- Desde el Ministerio Público se debe de cuantificar aproximadamente el monto de la reparación del daño, el cual deberá ser analizado durante el proceso por el Juez y en la sentencia determinar el monto total de dicha sanción.
- Sería oportuno que en este tema se modificaran las reglas procesales a fin de no obligar al agente del Ministerio Público a establecer un monto en concreto, sino que fuera viable el solo dar las bases para su cuantificación para que en ejecución de sentencia hiciera la condena el juez en el respectivo incidente. (Encuadrar la acreditación del pago de daños en materia civil a la penal, sería más factible y evitaría esa absolucón al sentenciado).
- Se tendría que hacer obligatorio dicho pago, dado que la víctima no considera únicamente la reclusión como la reparación del bien que le fue dañado, por dicha situación se tiene que pagar a la víctima y/o familiares. Cuando se declara insolvente el responsable, dentro del Centro de Readaptación Social se le deberá brindar una o varias opciones por medio de las cuales este pueda obtener un ingreso, del cual un porcentaje debiera ser destinado al pago de la reparación del daño.
- Desde que es presentada la denuncia, en el examen psicofísico se determina el estado de la víctima, por ello desde esta instancia se debe de señalar el lugar donde contará con el apoyo psicológico que es uno de los más importantes y que en el caso de abuso sexual y violación es difícil cuantificar de una manera económica. De esta forma se brinda el apoyo a la víctima y/o familiares los cuales

se supone deberán asistir si dicho delito fue una situación que causo daño psicológico y/o emocional, es decir establecer la asistencia médica, legal y jurídica no sólo como un derecho de la víctima, sino como una obligación para el Ministerio Público.

- Unificar el criterio en cuanto a la naturaleza del resultado del delito (estudio comparado referido en producto 11) para establecer si los delitos de naturaleza sexual son de resultado formal o material y de allí establecer los principios para la reparación del daño.
- Preparar y sensibilizar a los funcionarios de las Agencias del Ministerio Público y juzgados respecto de la visión de género a fin de que no prejuzguen ni etiqueten a la mujer.
- Establecer los principios y bases necesarias a fin de capacitar a las y los Agentes del Ministerio Público para poder determinar el monto del pago por la reparación de daños morales en los delitos de naturaleza sexual.
- Capacitar debidamente a personal de la Procuraduría y del Tribunal a fin de que sean capaces de fundamentar y motivar debidamente todas y cada una de sus actuaciones.
- Actualizar los esquemas de la Procuraduría en cuanto a sus órganos periciales a fin de que adecuen sus formatos y de igual forma sepan fundamentar y motivar sus conclusiones y metodologías.
- Establecer órganos de asistencia a las víctimas especializados a la concretización del pago de daños y perjuicios, para que actúen en el proceso penal y sean estos sus fines fundamentales.
- Establecer programas de apoyo entre el Tribunal, la Procuraduría e instituciones de asistencia pública o privada que les permita canalizar a las víctimas a alguna institución que les brinde asistencia, ya sea médica, psicológica o legal y que sea debidamente supervisada y concluida.
- Capacitar a los funcionarios de la Procuraduría respecto de cómo cuantificar los daños causados a las víctimas y cuáles son las pruebas idóneas y los requisitos y pormenores de las mismas para que los jueces condenen a dicho pago.
- Capacitación para las y los Agentes del Ministerio Público que les permita entender la existencia de la violencia y discriminación que se realiza diariamente en contra de las mujeres, por lo cual y sobre todo en ese tema, prevalecen los prejuicios que afectan la debida administración de justicia.
- Establecer la obligación del MP y jueces para que otorguen medidas precautorias para proteger a las víctimas del delito.
- Tratar de suprimir la utilización de machotes o plantillas a través de algún sistema informático.
- Capacitar a los servidores públicos a efecto de que no realicen una traducción o interpretación de los hechos que les son denunciados, sino se apeguen a las particularidades y narraciones que les realicen dado que en inmensas declaraciones se nota la mano de los Agentes del Ministerio Público.
- Capacitación para el Ministerio Público en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres.

- No hay conocimiento ni mucho menos aplicación en las agencias del Ministerio Público de los principios contenidos en materia de protección de los derechos humanos e las mujeres, contenidas sobre todo en las convenciones de CEDAW y Belém Do Pará, por lo cual se requiere sean capacitados debidamente en dicho tema, al igual que el personal del Tribunal.
- Crear espacios especiales para la celebración de audiencias en donde las victimas mujeres o menores de edad requieran protección.
- Dotar de los medios electrónicos necesarios para llevar a cabo diligencias en las que sea necesario salvaguardar derechos de victimas mujeres y hombres.
- Establecer criterios de aplicación, políticas, manuales o lineamientos que permitan una adecuada y eficiente atención de mujeres y/o menores víctimas de delitos, para los juzgados penales.
- Establecer programas de ayuda o atención psicológica para los/las funcionarias/os que laboran en los juzgado penales y que están en contacto directo con situaciones de alta carga emocional.
- En cuanto al pago de la Reparación del Daño, detectamos que es una práctica generalizada ignorar ó minimizar la petición del pago de la misma para los casos en los que el Ministerio Público la solicita. El argumento al que acuden los juzgadores para actuar en dicho sentido, principalmente en casos de daño moral, es “la falta de posibilidad de cuantificación del daño”, eludiendo así el cumplimiento de lo ordenado por el Código de Procedimientos Penales.
- Detectamos la práctica generalizada, para los casos de víctimas de delitos sexuales, de omitir ordenar y dar seguimiento a la reparación del daño psicológico, siendo esta omisión más grave para aquellos casos en los que la víctima es menor de edad.

Finalmente debemos comentar que el conocimiento respecto de los Derechos de las Mujeres consignados en los instrumentos internacionales de CEDAW y Belém do Pará es muy bajo y su aplicación es nula.

En concreto la mayor de las debilidades que encontramos en los funcionarios judiciales es la falta de capacitación en: Perspectiva de género y conocimiento de los Tratados Internacionales, concretamente CEDAW y Belém do Pará.

Entidad Federativa AL

1. Creación de mayor número de Juzgados.

La sobre carga de trabajo que se vive en los juzgados merma directamente la calidad de la administración e impartición de justicia, lo cual termina teniendo consecuencias en la atención brindada a las partes, así como en la calidad de las resoluciones dictadas por los tribunales, por ello, consideramos pertinente sugerir un análisis de la suficiencia los juzgados en el estado en relación al número de causas que tramitan.

2. Asignación de mayor personal a los juzgados.

Por las mismas razones citadas en el punto anterior, creemos pertinente, para la mejora en administración e impartición de justicia el aumento de personal en los Juzgados.

3. Creación de Secretarías de Proyectos.

Encontramos durante el estudio que en el Estado que nos ocupa no existe la figura de la Secretaría de Proyectos. Creemos pertinente proponer instaurarla, debido a que la carga de trabajo es muy grande y las y los funcionarios muchas veces no se dan abasto para poner la atención suficiente para elaborar los proyectos de sentencia. Por ello, consideramos que la atención tanto a las víctimas como a las y los presuntos responsables se vería beneficiada si se crearan dichas Secretarías, además de que las sentencias serían más sólidas y consistentes por el trabajo que empeñan en ellas las y los Secretarios de Proyecto. Una propuesta que ya fue señalada con anterioridad, sería que dicha Secretaría fuera un requisito previo para acceder al cargo de Jueza/ez.

4. Capacitación y ampliación del cuerpo de Peritas y Peritos.

Del los resultados obtenidos en los productos anteriores, encontramos que uno de los principales problemas en la impartición de justicia en el Estado, de acuerdo con las y los funcionarios, usuarios y abogados entrevistados, es que existen muy pocos peritos para llevar a cabo los estudios, sobre todo psicológicos, requeridos en las causas que se tramitan en los juzgados.

Por ello consideramos pertinente que se amplíe el cuerpo de peritos para poder dar celeridad y seguimiento a los dictámenes y tratamientos que se dictan con motivo de las causas penales, además de que se de una mayor formalidad, metodología y consistencia a los dictámenes que se emiten, esto es, que se de mayor capacitación a las y los peritos.

5. Ampliación del cuerpo de defensoras y defensores de oficio, mayor capacitación y mejores salarios.

Por los datos obtenidos del estudio consideramos pertinente sugerir también que se amplíe el número de defensoras y defensores de oficio, así como aumentarles los salarios y darles mucha más capacitación.

II. Cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos de las mujeres

1. Capacitación de las y los funcionarios en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.

Consideramos crucial hacer una recomendación sobre la capacitación de todas las y los funcionarios involucrados en el procedimiento, pues como pudimos comprobar, el desconocimiento en esta materia es casi absoluto, y por ello los resultados. La capacitación debe incluir módulos de atención a las víctimas, reparación del daño y coadyuvancia, así como propuestas de reformas legislativas en tal sentido para lograr una adecuación real de las normas domésticas a los convenios en la materia que nos ocupa.

2. Atención a víctimas por parte del Juzgado.

Consideramos que para poder dar cumplimiento real a las obligaciones contraídas por México en los Convenios y Tratados en materia de Derechos Humanos de las Mujeres es necesario establecer como obligación de las y los funcionarios informar a las víctimas de sus derechos constitucionales, de su derecho a constituirse como coadyuvante y a aportar elementos de prueba, así como a recibir atención legal, médica y psicológica y a la reparación del daño e interponer quejas cuando algún funcionario o funcionaria incurra en incumplimiento de sus funciones.

3. Coadyuvancia.

A raíz de los resultados obtenidos del estudio, pudimos constatar que las víctimas, extrañamente se constituyen como coadyuvantes, por ello consideramos necesario llevar a cabo una serie de reformas legislativas, así como capacitación y orientación a las y los agentes del Ministerio Público y a las víctimas sobre la coadyuvancia, en qué consiste (pues muchas de las víctimas no saben ni que existe la figura, ni qué significa) y como llevarla a cabo.

4. Reparación del daño.

Pudimos constatar también en el análisis de expedientes que la reparación del daño es un tema que tanto las y los Agentes del Ministerio Público, como las y los Jueces toman con poca seriedad, pues los Ministerios Públicos, generalmente sólo solicitan la reparación del daño como un mero trámite que cumplir, sin motivarla y sin fijar montos ni garantías.

Por su parte, las y los jueces suelen absolver a las y los sentenciados de dicha responsabilidad a pesar de lo estipulado por el Código de Procedimientos, que dicta que la reparación del daño deberá imponerse de oficio al responsable del delito.

5. Seguimiento a la asistencia psicológica dictada por los tribunales.

Finalmente, consideramos necesario establecer reformas legislativas en el sentido de dar seguimiento a la asistencia psicológica a víctimas dictada por los Tribunales, ya que, cuando se llega a decretar, extrañamente se le da seguimiento.

III. Reformas a la Legislación Vigente

Debe realizarse la armonización de las disposiciones locales a efecto de que cumplan con lo establecido por las convenciones de CEDAW y Belém Do Pará, con el propósito de evitar prácticas discriminatorias y de violencia en contra de las mujeres, justificadas en los preceptos legales vigentes y que ya fueron comentados en el capítulo extraído del libro de la Dra. Patricia Olamendi.

Entidad Federativa AF

Las mujeres en que se ha ejercido sistemáticamente la violencia física y psicológica de forma inmediata deben ser canalizadas a las diferentes instancias de gobierno a fin de que reciban pronta ayuda de personal profesionalizado. Realizar una serie de reformas a nivel legislativo, a efecto de que la/el Ministerio Público tenga el deber y la responsabilidad legal de informar y dar vista de forma inmediata a Fiscalías Especializadas, Procuradurías de la Defensa del Menor y de la Familia, Institutos de Protección a la Mujer, Comisiones Nacionales y Estatales de Derechos Humanos, etc., a efecto de que se otorgue un seguimiento especial de observancia y cumplimiento a sus derechos fundamentales, así como la de los miembros de su familia en caso de que también resultaran afectados. Por ejemplo, respecto a la realización de terapias psicológicas se tiene que velar por que éstas se cumplan de forma completa e integral, asignando personal especializado para que las realice si es necesario hasta en el domicilio particular de las afectadas, y que por ningún motivo se vean interrumpidos dichos tratamientos; y en igual forma deberán realizarse medidas de tipo médico; con el objetivo de lograr su pronta y completa recuperación desde el inicio del proceso hasta el final del mismo, procurando además que las visitas particulares a las víctimas se realicen de manera habitual a efecto de que las medidas de protección jurídica que se llegaran a establecer se cumplan en la vía de los hechos impidiendo que el agresor continúe desplegando su conducta delictiva.

Realizar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislación secundaria, así como a las legislaciones de las Entidades Federativas en la materia, que garanticen la implantación de las normas contenidas en los instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de las Mujeres ratificados por México (CEDAW, Belém Do Pará, Pacto San José, entre otros).

Otorgar una serie de facultades legales a dichas instancias gubernamentales para que además de dictar medidas cautelares o de protección apoyen a las mujeres afectadas, en el sentido de promover y lograr la acreditación de todos los elementos posibles en el trámite de la reparación de daños y perjuicios con miras a obtener su respectiva indemnización, promoviendo además que las ofendidas asistan a todas las diligencias que se sigan en el proceso.

De lo anterior se desprende que deberá existir entre las distintas dependencias una relación constante de coordinación y apoyo, además de procurar un contacto permanente con el abogado/a de la víctima y/o familiares coadyuvantes, así como con servicios periciales, la/el Ministerio Público, y hasta con el personal de los Juzgados del orden Civil.

Establecer en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como en las agencias del Ministerio Público, Tribunal Superior de Justicia de AF y diferentes Juzgados; módulos permanentes de información, apoyo y asesoría respecto a los derechos de las víctimas/ofendidas, no solamente los que se incluyen en las legislaciones locales y la Constitución Federal sino que también se explique todos los alcances de las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales de Protección a los derechos de las Mujeres (CEDAW, Belem Do Pará, Pacto San José, etc.).

También es importante antes y durante todo el proceso legal, contar con la oportuna intervención de intérpretes para el caso de mujeres indígenas o extranjeras. Además que se obsequie gratuitamente al público en general material informativo actual y didáctico del tema (libros, folletos, trípticos, audio, videos, etc.), dando participación en este sentido a organismos de la sociedad civil.

Se realice por parte de dichas autoridades y de forma periódica; conferencias, foros de debate y discusión donde se aborden casos representativos de violencia contra las mujeres, expuestos por las mismas afectadas; cursos y talleres sobre este tema, promoviendo la asistencia de todos los sectores de la sociedad, estudiantes universitarias/os, víctimas/ofendidas/os, Fiscales, juezas/ces, funcionarias/os y especialistas en él la materia.

Llevar a cabo campañas de promoción de la no violencia hacia las mujeres por parte de las referidas instancias gubernamentales; dando difusión de la misma a través de todos medios de comunicación impresos y electrónicos, realizando programas de radio, anuncios en periódicos y revistas de aceptable circulación, spots por televisión, elaboración de páginas web, líneas telefónicas de auxilio e información del tema, siendo las mismas operadoras las que habitualmente llamen a los domicilios particulares de gran parte de la población preguntando si requieren servicio de asesoría o si saben o conocen de algún caso de este tipo, procediendo de manera inmediata.

Dichas instancias gubernamentales deberán rendir de manera obligatoria un informe semestral o anual de actividades donde pública y abiertamente se desglosen las tareas y actividades realizadas a favor de las víctimas de la violencia contra las mujeres; dando cuenta del estado que guarda sus casos particulares, detallando su situación jurídica actual y en qué nivel se ha logrado cumplir y respetar las garantías procesales de las mismas, enumerando las diversas acciones oficiales emprendidas para combatir dicha problemática, invitando a las/los miembros de las organizaciones de la sociedad civil para que expongan sus propuestas y punto vista

Establecer con ayuda de recursos públicos estatales y/o federales, un Fondo permanente de apoyo económico a favor de las víctimas/ofendidas.

Levantar de manera periódica encuestas y cuestionarios sobre dicho tema por cuenta de las mencionadas autoridades, a fin de obtener una fuente de datos y estadísticas confiables, pudiendo así obtener un diagnóstico preciso que ayude a medir los efectos de dicha problemática social.

Que las citadas Dependencia de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Educación Pública realicen de manera reiterada y en todos los niveles y grados escolares (Primaria, Secundaria, Preparatoria, Universidad), desde las respectivas aulas la impartición de talleres y cursos donde se promuevan e informen temas como; la importancia de crear una cultura de la no violencia hacia las mujeres, el respeto a los derechos humanos como factor de crecimiento de las democracias.

Finalmente debemos decir que por lo que hace a las modificaciones a los Códigos Penales de cada una de las Entidades Federativas que formaron parte del presente estudio, ya han sido señaladas en el apartado 3.2 del presente estudio, el cual fue desarrollado con base en la obra de la Dra. Patricia Olamendi.